


Ciudad de México a 03 de abril de 2025
CEAVICDMX/264/2025

LIC. EDGAR ALEJANDRO GÓMEZ JAIMES
COORDINADOR DEL REGISTRO DE VÍCTIMAS
PRESENTE.

En autos del JUICIO DE AMPARO 1334/2024, promovido ERIKA NICTEHA FLORES GUTIERREZ, ante el juzgado SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO y en atención al OFICIO: 11637/2025 signado por la Secretaria del Juzgado, y recepcionado en esta Comisión el 02 de abril de este año, se le solicita atender lo acordado por el Juzgado de Distrito, marcando copia del cumplimiento a esta oficina.

Al respecto, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 79, 80, 81, 82, 83, 84, 112 y 117, fracción I y V de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México y el Manual Administrativo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México con número de registro MA- CAV-23-431-D8F5F, me permito remitir para sus consideraciones a fin de estar en condiciones de continuar con los procesos subsecuentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.


Lic. Ernesto Alvarado Ruiz
Comisionado Ejecutivo de Atención a
Víctimas de la Ciudad de México.

Elaboró: RRE 

Revisó: CVPC 





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SENTENCIA

11636/2025 COMISIONADO EJECUTIVO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE)

11637/2025 COORDINADOR DEL REGISTRO DE VÍCTIMAS DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE)

EN LOS AUTOS DEL CUADERNO PRINCIPAL RELATIVO AL JUICIO DE AMPARO NÚMERO **1334/2024**, PROMOVIDO POR ERIKA NICTEHA FLORES GUTIÉRREZ, CON ESTA FECHA SE DICTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO QUE A LA LETRA DICE:

VISTOS los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo 1334/2024, promovido por Erika Nictéha Flores Gutiérrez, por propio derecho, contra actos del Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas de la Ciudad de México y otra autoridad; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el treinta de julio de dos mil veinticuatro, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, remitió por cuestión de turno a este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Erika Nictéha Flores Gutiérrez, por propio derecho, FUNDACION IRIS EN PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, ASOCIACIÓN CIVIL, por conducto de su representante Erika Nictéha Flores Gutiérrez, así como en representación de los diversos asociados, FÁTIMA CHACÓN FLORES, RUBÉN ALEJANDRO CHACÓN RAMOS, IRIS ALEJANDRA CHACÓN FLORES, VÍCTOR ALFONSO TAPIA AGUILLÓN, MONSERRAT MARINES CHACÓN FLORES, ALFONSO TAPIA VARGAS, JOSÉ ADRIÁN MARTÍNEZ FLORES, DIANA ABIGAIL MORENO ARREOLA, CONCEPCIÓN LETICIA PAGAZA SÁNCHEZ, VERÓNICA ARREOLA VEGA, HAIDE ESTEPHANIE GARCÍA GALLEGOS, EDUARDO PÉREZ ARREOLA, MARÍA MARGARITA GUTIÉRREZ GARCÍA, GERMÁN JORGE PALAFOX MEDELLÍN, JAIME GARCÍA MUÑO, MARÍA DE LOS ÁNGELES MACALLÁN MARTÍNEZ, MIGUEL ANTONIO GARCÍA AYÓN, JULIETA LIZBETH MARTÍNEZ FLORES, DYLAN REYES GUZMÁN, LIZBETH TRUJILLO AMADOR, ANA MARGARITA FLORES GUTIÉRREZ, ÉRIKA GONZÁLEZ CRUZ, ALEJANDRA VALENCIA MARTÍNEZ, LILIANA GUADALUPE VARGAS GONZÁLEZ, MELANIE GISELLE HERNÁNDEZ CARABEO, YOSELÍN ARACELI VALENCIA MARTÍNEZ, MARÍA MARIBEL MEDINA MENDOZA, DIANA ABIGAIL MORENO ARREOLA, VÍCTOR TAPIA AGUILLÓN, PAOLA MONSERRAT SARMIENTO RESOLLEDO, ANA YISSEL CERÓN VÁZQUEZ, JUAN DE DIOS CHACÓN FLORES, EVELIN RUBÍ MARTÍNEZ MEDRANO, RAÚL ANTONIO VELÁZQUEZ LÓPEZ TELLO, MARÍA CRISTINA SANDOVAL BAUTISTA, MARÍA ELENA SANDOVAL BAUTISTA y JAIME GARCÍA MUÑO.

Demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que se indican enseguida.

AUTORIDADES RESPONSABLES:

Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas de la Ciudad de México.

Coordinador del Registro de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México.

ACTOS RECLAMADOS.

La negativa verbal y/o escrita de reconocer a los promoventes la calidad de víctimas derivado de la recomendación número 01/2024, expedida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

La orden para omitir notificar personalmente a los promoventes dicha determinación.

La omisión de integrar un expediente a efecto de determinar las medidas de reparación integral del daño, en favor de los promoventes.

SEGUNDO. Por acuerdo de dos de agosto de dos mil veinticuatro, se acordó la demanda la cual se registró con el número 1334/2024, se formuló prevención a efecto de que la imputante dentro del plazo de cinco días aclara lo siguiente:

"a) Señale si la persona moral quejosa Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, asociación civil también tiene el reconocimiento de víctima en la Recomendación 01/2024, emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, o dicho carácter se reconoció únicamente a las personas físicas señaladas como quejosos.

Señale el carácter con que se ostentan los siguientes quejosos:

Número

Nombre del (a) quejoso(a)

02

FÁTIMA CHACÓN FLORES

03

RUBÉN ALEJANDRO CHACÓN RAMOS

04

IRIS ALEJANDRA CHACÓN FLORES

05

VÍCTOR ALFONSO TAPIA AGUILLÓN



- 10
CONCEPCIÓN LETICIA PAGAZA SÁNCHEZ
- 11
VERÓNICA ARREOLA VEGA
- 12
HAIDE ESTEPHANIE GARCÍA GALLEGOS
- 13
EDUARDO PÉREZ ARREOLA
- 14
MARÍA MARGARITA GUTIÉRREZ GARCÍA
- 15
GERMÁN JORGE PALAFOX MEDELLÍN
- 16
JAIME GARCÍA MUÑOZ
- 17
MARÍA DE LOS ÁNGELES MAGALLÁN MARTÍNEZ
- 18
MIGUEL ANTONIO GARCÍA AYÓN
- 19
JULIETA LIZBETH MARTÍNEZ FLORES
- 20
DYLAN REYES GUZMÁN
- 21
LIZBETH TRUJILLO AMADOR
- 22
ANA MARGARITA FLORES GUTIÉRREZ
- 23
ÉRIKA GONZÁLEZ CRUZ
- 24
ALEJANDRA VALENCIA MARTÍNEZ
- 25
LILIANA GUADALUPE VARGAS GONZÁLEZ
- 26
MELANIE GISELLE HERNÁNDEZ CARABEO
- 27
YOSELÍN ARACELI VALENCIA MARTÍNEZ
- 28
MARÍA MARIBEL MEDINA MENDOZA
- 29
DIANA ABIGAIL MORENO ARREOLA
- 30
VÍCTOR TAPIA AGUILLÓN
- 31
PAOLA MONSERRAT SARMIENTO REBOLLEDO
- 32
ANA YISSEL CERÓN VÁZQUEZ
- 33
JUAN DE DIOS CHACÓN FLORES
- 34
FELIÁN RUBÍ MARTÍNEZ MEDRANO
- 35
RAÚL ANTONIO VELÁZQUEZ LÓPEZ TELLO
- 36
MARÍA CRISTINA SANDOVAL BAUTISTA



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

La promovente mediante escrito presentado el nueve de agosto de dos mil veinticuatro, desahogó el requerimiento de mérito, donde informó que la Asociación Civil no tenía reconocida el carácter de víctima y que sólo lo eran las personas que ahí se indican, además exhibió un documento donde Erika Nicteha Flores Gutiérrez, manifestó que tenían el carácter de asociados los diversos promoventes que se señalaban en el escrito inicial de demanda.

Por acuerdo de doce de agosto de dos mil veinticuatro se admitió a trámite parcialmente el juicio.

Respecto de los promoventes: FUNDACIÓN IRIS EN PROMOSIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, ASOCIACIÓN CIVIL y los diversos asociados, FÁTIMA CHACÓN FLORES, RUBÉN ALEJANDRO CHACÓN RAMOS, IRIS ALEJANDRA CHACÓN FLORES, VÍCTOR ALFONSO TAPIA AGUILLÓN, MONSERRAT MARINES CHACÓN FLORES, ALFONSO TAPIA VARGAS, JOSÉ ADRIÁN MARTÍNEZ FLORES, DIANA ABIGAIL MORENO ARREOLA, CONCEPCIÓN LETICIA PAGAZA SÁNCHEZ, VERÓNICA ARREOLA VEGA, HAIDE ESTEPHANIE GARCÍA GALLEGOS, EDUARDO PÉREZ ARREOLA, MARÍA MARGARITA GUTIÉRREZ GARCÍA, GERMÁN JORGE PALAFOX MEDELLÍN, JAIME GARCÍA MUÑO, MARÍA DE LOS ÁNGELES MAGALLÁN MARTÍNEZ, MIGUEL ANTONIO GARCÍA AYÓN, JULIETA LIZBETH MARTÍNEZ FLORES, DYLAN REYES GUZMÁN, LIZBETH TRUJILLO AMADOR, ANA MARGARITA FLORES GUTIÉRREZ, ÉRIKA GONZÁLEZ CRUZ, ALEJANDRA VALENCIA MARTÍNEZ, LILIANA GUADALUPE VARGAS GONZÁLEZ, MELANIE GISELLE HERNÁNDEZ CARABEO, YOSSELIN ARACELI VALENCIA MARTÍNEZ, MARÍA MARIBEL MEDINA MENDOZA, DIANA ABIGAIL MORENO ARREOLA, VÍCTOR TAPIA AGUILLÓN, PAOLA MONSERRAT SARMIENTO REBOLLEDO, ANA YISSEL CERÓN VÁZQUEZ, JUAN DE DIOS CHACÓN FLORES, EVELIN RUBÍ MARTÍNEZ MEDRANO, RAÚL ANTONIO VELÁZQUEZ LÓPEZ TELLO, MARÍA CRISTINA SANDOVAL BALTISTA, MARÍA ELENA SANDOVAL BALTISTA y JAIME GARCÍA MUÑO, se desechó de plano la demanda porque se consideró en orden con la Asociación Civil, que los actos reclamados no afectaban su esfera jurídica, por cuanto a los asociados no se tuvo por justificada su calidad de asociados dado los vicios del documento con el que se pretendía justificar tal calidad.

Con relación a la restante quejosa Erika Nicteha Flores Gutiérrez, por propio derecho, se admitió a trámite el juicio, se ordenó dar la intervención legal al Fiscal Federal de la adscripción, se requirió a las autoridades responsables su informe con justificación y se fijó hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional.

TERCERO.- Por acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veinticuatro, con base en las constancias remitidas por las autoridades responsables en su informe justificado, se requirió a la parte quejosa, por el plazo de quince días, para que manifestara si deseaba ampliar la demanda, respecto de los siguientes tópicos:

- 1.- La complementación en la fundamentación y motivación del acto, donde se exponían las razones por las que no procedía la inscripción de la quejosa en el Registro de Víctimas que se lleva en esa Comisión.
- 2.- El oficio CEAVIDMX/DFV/RELOV/521/2024, de dieciocho de julio de dos mil veinticuatro, signado por el Coordinador del Registro Local de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México.

La quejosa fue omisa en ampliar la demanda, motivo por el cual en la audiencia constitucional se tuvo por precluido su derecho.

CUARTO.- Así, una vez integrado el presente expediente, se llevó a cabo la audiencia constitucional en términos del acto que antecede.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. El suscrito Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 54, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues se reclaman diversas omisiones atribuidas a autoridad distinta de la judicial en materia administrativa.

SEGUNDO. Conforme a lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, de conformidad con lo señalado en la jurisprudencia número XVII.2/J10, publicada en la página sesenta y ocho, del tomo setenta y seis, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y cuatro, de la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, octava época, cuyo rubro dice: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS, TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO.", advirtiéndose que se tienen como actos reclamados testados:

- 1.- La negativa verbal y/o escrita de reconocer a la quejosa la calidad de víctima derivado de la recomendación número 01/2024, expedida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
- 2.- La orden para omitir notificar personalmente a la quejosa la determinación de no reconocerle la calidad de víctima derivado de la recomendación número 01/2024, expedida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
- 3.- La omisión de integrar un expediente a efecto de determinar las medidas de reparación integral del daño, en favor de la quejosa.

TERCERO. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables: Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas de la Ciudad de México y Coordinador del Registro de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, consistentes en la negativa verbal de reconocer a la quejosa la calidad de víctima derivado de la recomendación número 01/2024, expedida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; ello porque si bien, tales autoridades al rendir su informe con justificación fueron omisas en pronunciarse al respecto, sin embargo no opera la presunción de certeza que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, ya que de constancias de autos no se desprende que la negativa fuese verbal, sino que se encuentra inmerso en tres documentos, a saber:

Ante la inexistencia de los actos reseñados, en relación con las autoridades Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas de la Ciudad de México y Coordinador del Registro de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, con fundamento en la fracción IV del artículo 33 de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio:

Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.2o./J/18, visible en la página 164, tomo 19-21, julio-septiembre de 1989, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época; que dispone:

"ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no ofrece alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo."

De igual forma, es aplicable la tesis VI.2o./J/20, consultable en la página 627, tomo IV, segunda parte-2, julio a diciembre de 1989, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época; cuyo rubro y texto indican:

"INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, proceda el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo."

Así, como la jurisprudencia VI.2o./J/308, página 77, tomo 80, agosto de 1994, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época; cuyo contenido es:

"ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL, CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, al que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que imputa y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional; aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados."

Asimismo, es aplicable la tesis IV.3o./72 K, página 284, tomo XIII, enero de 1984, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época; que dispone:

"JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no exista el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías."

CUARTO.- Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables: Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas de la Ciudad de México y Coordinador del Registro de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, consistente en la negativa escrita de reconocer a la quejosa la calidad de víctima derivada de la recomendación número 01/2024, expedida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Lo anterior, porque así lo manifestaron al rendir su informe con justificación, manifestación que además se justifica con:

1.- El oficio CEAVICDMX/DFV/RELOV/521/2024, de dieciocho de julio de dos mil veinticuatro, signado por el Coordinador del Registro Local de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México.

2.- El informe justificado de las responsables, de donde se desprende que ahí se exponen los fundamentos y motivos por los que no procedía el reconocimiento de víctima de la quejosa.

A su vez, son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables: Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas de la Ciudad de México y Coordinador del Registro de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, consistentes en:

- La orden para omitir notificar personalmente a la quejosa la determinación de no reconocerle la calidad de víctima derivada de la recomendación número 31/2024, expedida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

- La omisión de integrar un expediente a efecto de determinar las medidas de reparación integral del daño, en favor de la quejosa.

Ello, porque las responsables al rendir su informe con justificación fueron omisas en pronunciarse al respecto, ya que únicamente informaron las causas por las cuales no procedía tal registro, motivo por el cual opera la presunción de cartería que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo.

QUINTO.- Previamente a efectuar el examen de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa; por cuestión de orden público y por ser de estudio preferente, este Juzgado Federal, analiza oficiosamente si en el presente asunto se actualiza alguna causa que motive decretar el sobreseimiento en este asunto, de oficio, o bien, invocada por alguna de las partes atento a la tesis jurisprudencial número novecientos cuarenta, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, Segunda Parte, visible a fojas mil quinientas treinta y ocho, que dice:

"IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia."

Así, el suscrito considera que respecto del acto reclamado consistente en la negativa escrita de reconocer a la quejosa la calidad de víctima derivada de la recomendación número 01/2024, expedida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Inclusión al registro de víctimas derivado de la recomendación número 01/2024, expedida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a saber:

- 1.- El oficio CEAVIDCMX/DFV/RELOVI/521/2024, de diechocho de julio de dos mil veinticuatro, signado por el Coordinador del Registro Local de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México.
- 2.- El informe justificado de las responsables, de donde se desprende que ahí se exponen los fundamentos y motivos por los que no procedía el reconocimiento de víctima de la quejosa.
- 3.- El Dictamen de Ingreso Negativo de veintiocho de enero de dos mil veinticinco, suscrito por el Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, donde se confirma la improcedencia en el registro de la quejosa.

Respecto de los primeros dos documentos, mediante auto de veintidós de noviembre de dos mil veinticuatro, se dio vista de forma personal a la parte quejosa, y se le requirió expresamente para que dentro del plazo de quince días manifestara si a su interés legal convenía ampliar la demanda respecto del mencionado oficio, o bien, sobre la complementación de la fundamentación y motivación de la negativa a su solicitud, sin que sobre el particular la parte quejosa hubiera desahogado el requerimiento aludido, por lo que en la audiencia constitucional, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos, teniéndose por precluido el derecho, como actos reclamados y autoridades responsables únicamente a las precisadas en el escrito de demanda.

En relación con el tercer documento, mediante auto de cuatro de febrero de dos mil veinticinco, se dio vista de forma personal a la parte quejosa, y se le requirió expresamente para que dentro del plazo de tres días manifestara lo que a su interés conviniera, sin que sobre el particular la parte quejosa hubiera desahogado el requerimiento aludido.

Así, es evidente que la parte quejosa no señaló como acto reclamado el oficio CEAVIDCMX/DFV/RELOVI/521/2024, de diechocho de julio de dos mil veinticuatro, signado por el Coordinador del Registro Local de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, donde se contiene la negativa escrita a la solicitud del imputante y la cual aducía desconocer.

A su vez, nada adujo respecto de la complementación en la fundamentación y motivación realizada por las responsables en su informe justificado, donde expusieron las causas por las cuales no procedía el registro de la quejosa ante esa Comisión.

Finalmente, tampoco nada adujo sobre el Dictamen de Ingreso Negativo de veintiocho de enero de dos mil veinticinco, suscrito por el Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, donde se confirmó la improcedencia en el registro de la quejosa.

Ante ello, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 5, fracción II, y 108, fracción IV, todos de la Ley de Amparo, derivado de que no señaló como actos reclamados los actos jurídicos donde efectivamente se encontraba contenida la negativa de las autoridades, ni a quienes participaron en su emisión, por lo que procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, conforme a la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia.

Resulta aplicable al caso, por analogía, la tesis de jurisprudencia I.5a.P. J13, página 1363, tomo XXII, Septiembre de 2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época; cuyo rubro y texto indican:

"SOBRESEIMIENTO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO, SI NEGADO EL ACTO RECLAMADO POR ALGUNA O VARIAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE DEMUESTRA SU EXISTENCIA RESPECTO DE OTRA U OTRAS, PUES LA CAUSAL QUE SE ACTUALIZA ES LA PREVISTA EN LA DIVERSA FRACCIÓN III DEL PRECEPTO Y LEY CITADOS. En el supuesto de que las autoridades negaran el acto que les fue atribuido, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba en contrario, y de las constancias procesales se demuestra que una diversa autoridad aceptó el mismo, esto es, que el acto reclamado sí existe, no resulta lógico ni jurídico sostener que éste, considerado como una determinación de la autoridad responsable que puede afectar la esfera jurídica del quejoso, sólo exista respecto de algunas autoridades y no en relación con otras, es decir, tal hipótesis se actualizaría sólo cuando todas las autoridades señaladas como responsables negaran la existencia del acto que se les atribuyó y en autos no se demuestre lo contrario, pero no si se acredita que los actos reclamados sí existen, respecto de alguna autoridad. Consecuentemente si no se demuestra la intervención de ciertas autoridades en el juicio de amparo, se actualizará la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 11, ambos de la Ley de Amparo, pues si no emplieron, dictaron, publicaron ni ejecutaron el acto que se reclama, no puede considerárseles como responsables en el juicio de amparo, por tanto, se deberá sobreseir en términos del artículo 74, fracción III, y no de la IV, del mismo precepto."

A mayor abundamiento, se precisa que este juzgador se encuentra imposibilitado para analizar los actos emitidos por autoridades que no fueron llamadas a juicio, en razón de que constituye carga procesal de la parte quejosa señalar a las autoridades responsables, requisito establecido por la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, por lo que es obvio concluir que si alguna autoridad no tiene el carácter de responsable, es totalmente ajena al estudio de la presente litis constitucional.

Es aplicable al caso, la tesis I.4a.A.92 K, página 150, tomo XVI, febrero de 1995, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época; que dispone:

"AUTORIDAD RESPONSABLE NO LLAMADA A JUICIO. IMPOSIBILIDAD DE ANALIZAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE SUS ACTOS AUN CUANDO DEPENDA DIRECTAMENTE DE OTRA DIVERSA QUE SI FUE LLAMADA A JUICIO. Es correcto el razonamiento del juez de Distrito por medio del cual determina que no pudo analizar la constitucionalidad del acto reclamado de una autoridad que no fue llamada a juicio, y no es obstáculo para determinar lo anterior, el hecho de que esta última dependa directamente de otra que sí fue llamada a juicio, ello en virtud de que, dentro de las atribuciones de la autoridad que suscribió el acto reclamado, no se advierte que pueda hacerlo en sustitución de la señalada como responsable."

*ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente:

XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.*

Conforme a la doctrina y a los criterios jurisprudenciales sustentados por nuestro Máximo Tribunal, se entiende que han cesado los actos y sus efectos cuando éstos son suspendidos o acabados, esto es, cuando se revocan o derogan los actos combatidos de manera que no producen efecto alguno en la esfera de derechos del gobernado, como si el acto jamás hubiera nacido.

De lo expuesto, se obtiene que sobreviene la causa de improcedencia en comento, cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto que el gobernado considera que le causa perjuicio, o cuando constituye una situación jurídica que destruya la que dio motivo al juicio de amparo, en atención a la imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, en el ámbito de competencia de la autoridad enjuiciada.

Así, únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada.

Sobre el particular, nuestro Máximo Tribunal del País ha sustentado diversas tesis que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, entre otras, las siguientes:

***ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS.-** Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." (Quinta Época, Tomo XCIX, página 2443).

***ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS.-** La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobreseá, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el período comprendido entre el día en que se realizó y aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo y por lo mismo, no hay cesación de efectos." (Quinta Época, Tomo LXXXIX, página 731).

***ACTOS RECLAMADOS. CESACIÓN DE LOS.-** Para que se pueda estimar que han cesado los efectos del acto reclamado, debe existir una revocación total de éste y de los efectos que haya producido, y la revocación debe ser definitiva y no provisional." (Quinta Época, Tomo XCII, página 774).

***ACTO RECLAMADO. CUANDO HAY CESACIÓN DEL.-** Es cierto que la Ley de Amparo establece como causa de improcedencia, el hecho de que hayan cesado los efectos del acto reclamado; pero tratándose de actos que se tradujeron en una situación de hecho, esa cesación no puede producirse por la sola determinación de la autoridad responsable, revocando el acuerdo que dio origen anteriormente a ella, pues para que positivamente cesen esas consecuencias, es preciso que la autoridad, tras de revocar su resolución, dicte las medidas eficaces encaminadas a establecer positivamente las cosas al estado que tenían antes de ejecutarse el acto de que se trata." (Quinta Época, Tomo LVIII, página 2161).*

De las precisiones realizadas se colige que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho humano violado.

En esa tesitura, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implícitamente no sólo como la potestad definitiva de los actos de autoridad, sino como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerita ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.

En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trata y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exige.

Por tanto, en términos del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzarse su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia.

Ahora bien, conviene recordar que el acto reclamado en estudio lo constituye la orden para omitir notificar personalmente a la quejosa la determinación de no reconocerle la calidad de víctima derivado de la recomendación número 01/2024, expedida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

De manifestarse de autos no se admite que se crea orden para omitir notificar al quejoso, por lo que se declara que



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

"2025, Año de la Mujer Indígena"

FORMA B.1

3.- El Dictamen de Ingreso Negativo de veinticinco de enero de dos mil veinticinco, suscrito por el Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, donde se confirma la improcedencia en el registro de la quejosa.

Respecto de los primeros dos documentos, mediante auto de veintidós de noviembre de dos mil veinticuatro, se dio vista de forma personal a la parte quejosa, y se le requirió expresamente para que dentro del plazo de quince días manifestara si a su interés legal convenía ampliar la demanda respecto del mencionado oficio, o bien, sobre la complementación de la fundamentación y motivación de la negativa a su solicitud; sin que sobre el particular la parte quejosa hubiera desahogado el requerimiento aludido, por lo que en la audiencia constitucional, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos, teniéndose por producido el derecho, como actos reclamados y autoridades responsables únicamente a las precisadas en el escrito de demanda.

En relación con el tercer documento, mediante auto de cuatro de febrero de dos mil veinticinco, se dio vista de forma personal a la parte quejosa, y se le requirió expresamente para que dentro del plazo de tres días manifestara lo que a su interés conviniera, sin que sobre el particular la parte quejosa hubiera desahogado el requerimiento aludido.

En esa testura, este órgano jurisdiccional determina que sobreviene la causa de improcedencia descrita, pues existió una situación jurídica que destruyó la omisión reclamada y recusó a la parte quejosa en el goce del derecho violado, como lo es que se le notificó por este juzgado la determinación donde se negó su registro y las causas de ello, dándosele la oportunidad de integrarla a la Litis constitucional, sin haberlo hecho así.

En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio por cuanto hace al acto reclamado consistente en la orden para omitir notificar personalmente a la quejosa la determinación de no reconocerle la calidad de víctima derivado de la recomendación número 01/2024, expedida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Es aplicable al caso en lo conducente la tesis de jurisprudencia número 58/99 (XLIX/98), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada el veintidós de mayo de mil novecientos noventa y nueve, que a la letra dice:

"CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se deriva a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola invadido, la cesación no deja ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la odiosidad de extinguir la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que merece ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Finalmente, respecto del restante acto reclamado consistente en la omisión de integrar un expediente a efecto de determinar las medidas de reparación integral del daño, en favor de la quejosa, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, ya que al quedar firme, por falta de impugnación, la determinación de no reconocerle la calidad de víctima a la quejosa derivado de la recomendación número 01/2024, expedida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ello implica que no existe razón para integrar un expediente a efecto de determinar las medidas de reparación integral del daño, pues el acto que debía ordenar su integración no existe.

Por último, tomando en consideración que en el expediente de autos 1/2024 del índice de este juzgado, se autorizó la consulta del expediente electrónico al Fiscal Federal Adscrito, VÍCTOR EINAR VIVANCO CÁRDENAS, a través del usuario "Rubick".

En relatadas circunstancias, se ordena que las notificaciones que deban realizarse al Fiscal Federal Adscrito por medio de oficio en el presente asunto se efectúen de manera electrónica.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en lo dispuesto en los artículos 37, 61, 62, 63, 73, 74, 75, 77, 78, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 217, todos de la Ley de Amparo, se **RESUELVE**

ÚNICO.- Se **SOBRESEE** en el presente juicio de amparo.

NOTIFIQUESE DE MANERA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA, ASIMISMO NOTIFIQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y DE MANERA ELECTRÓNICA A LA FISCAL FEDERAL ADSCRITA.

Así lo resolvió y firma Cemán Cruz Silva Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido del secretario Everardo Mercado Salceda quien autoriza y certifica que las promociones que, en su caso, generaron la presente resolución, y la resolución misma, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico, hasta hoy veinticinco de marzo de dos mil veinticinco, fecha en que lo permitieron las labores de este juzgado federal. Doy fe. EMS/LALA

"FIRMADO. DOS FIRMAS ILEGIBLES, UNA SOBRE EL NOMBRE DEL JUEZ Y OTRA SOBRE EL DEL SECRETARIO(A). RUBRICADO."

LO QUE COMUNICO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES PROCEDENTES.

CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTICINCO.

SECRETARIO(A) DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA

